

# Explosión en septiembre

Marcia Scantlebury<sup>1</sup>

Cuando todo hacía presagiar que el área de la cultura navegaría por aguas tranquilas, se desató la tempestad. Y el Gobierno se vio enfrentado a una situación inesperada que lo dejó descolocado y dando manotazos de ciego.

Las que encendieron la mecha fueron las palabras del historiador y recién estrenado ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas Mullor, detectadas por un sagaz investigador del diario *La Tercera* en el libro *Diálogo de conversos* (2015).

En sus páginas, en uno más de sus insistentes testimonios de transformación, este exiliado en Suecia que cambió al Che Guevara por la escuela de Chicago, se pronuncia con vehemencia sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: “Más que un Museo se trata de un montaje cuyo propósito que, sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar. Es una manipulación de la historia”.

Por su parte, el escritor, coautor de la obra también converso y actual ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, sostiene que el edificio de Quinta Normal “no es un museo nacional, es un museo de la mala memoria”.

A pocas horas de abandonar su cargo en el segundo piso de La Moneda donde oficiaba como Director de Contenidos y *speechwriter* de los discursos presidenciales, Rojas se vio enfrentado a la indignación de la opinión pública y sus palabras lograron unir no solo a la oposición —desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana—, sino a todas las organizaciones vinculadas al mundo de la cultura, que coincidieron en señalar que estaba inhabilitado para ejercer el cargo.

---

<sup>1</sup> Marcia Scantlebury. Periodista. Integrante de los directorios del Museo de la Memoria, Fundación Henry Dunant y Fundación Equitas.

Mientras tanto, el angustiado personero hacía intentos desesperados por negar lo innegable, señalando que sus declaraciones provenían de una entrevista antigua que no reflejaba su pensamiento actual. Pero entonces salió a flote una entrevista con CNN en 2016, donde Rojas reafirmaba sus ataques acusando al Museo de la Memoria de pertenecer a la izquierda y estar destinado a contar “una versión falsa de la historia de Chile (...) es algo para que la gente no piense, para atontarte”.

Miguel Crispi (Revolución Democrática, RD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, manifestó su inquietud sobre la posición de Rojas, considerando que el financiamiento del Museo depende de la cartera de Cultura, a lo que agregó que “sería interesante conocer cuándo este cambió de opinión”. La presidenta de esta instancia, Carmen Hertz, fue categórica: “Alguien así no puede ocupar un cargo público, menos aún ser ministro”.

Los Jaivas, que para el domingo 12 de agosto tenían agendado un punto de prensa junto al recién designado secretario de Estado, decidieron suspender su participación, y el Premio Nacional Raúl Zurita hizo un llamado a “no participar en ninguna instancia en que este personaje esté involucrado”.

A esas alturas, los ministros del Comité Político llegaban a la conclusión de que la presión política de la oposición no se detendría y comenzaban a distanciarse de las críticas de Rojas al Museo.

A las 22.25 horas de ese domingo, Evópoli, bajo la conducción de Hernán Larraín Matte, separó aguas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), colectividades que se habían alineado con el historiador, y difundió una declaración pública en la que rechazaba sus dichos respecto del Museo.

La fractura en la coalición Chile Vamos se profundizó, instalándose peligrosamente en la antesala de dos fechas de alto contenido simbólico: el 11 septiembre, en que se cumplirían 45 años del Golpe Militar, y el aniversario del plebiscito del 5 de octubre de 1988.

El lunes 13 de agosto, a las 12.30 horas, el Presidente anunció en el Patio de los Naranjos de La Moneda que su gobierno no compartía las opiniones del titular de Cultura, Mauricio Rojas, sobre el sentido y la misión del Museo de la Memoria, razón por la cual aceptaba su renuncia.

La ansiedad por hacer méritos con sus otrora adversarios le significó al exmilitante de izquierda —cuya pertenencia al MIR ha sido puesta en duda por sus dirigentes— una rápida remoción del gabinete presidencial y su salida de La Moneda.

Solo cuatro días antes, Sebastián Piñera se había visto obligado a reconocer su equivocación con respecto a dos de sus apuestas personales al con-

formar el Ministerio. Él esperaba, entonces, que las salidas de Gerardo Varela de Educación y de Alejandra Pérez de Cultura frenaran la baja sostenida del Gobierno en las encuestas. Sin embargo, en menos de noventa horas, se vio obligado a reconocer otro error garrafal.

Dejando claro su perfil más distante del mundo de los derechos humanos en este segundo período —atrás quedaron su discurso sobre los “cómplices pasivos” y medidas como el cierre del penal Cordillera en el marco de los cuarenta años del Golpe—, el Presidente disparaba contra quienes criticaban a su defenestrado colaborador. Se refirió a “cierto sector del país que pretende imponer una verdad única y que no tiene ninguna tolerancia ni respeto por la libertad de expresión y de opinión de todos nuestros compatriotas”. Llamó también a analizar con objetividad, con profundidad y con buena fe, “por qué se debilitaron la democracia y el Estado de derecho en nuestro país”.

## **1 Oposición y artistas en pie de guerra**

En pocas horas, una comunidad artística indignada, una ciudadanía descreída y una oposición desconcertada desplegaron sus banderas y, obedeciendo a la convocatoria del poeta Raúl Zurita, coparon la explanada del denostado Museo de la Memoria.

Entre los convocantes figuraban fundamentalmente artistas y activistas de derechos humanos. Entre ellos, el actor Alejandro Goic que, pocos días antes, había protagonizado un bullado episodio al retirarse del estudio de un matinal cuando ingresó a ese espacio Patricia Maldonado. “No me da el alma, no me da el corazón”, explicó el actor al ver que entraba al estudio la desafiante animadora y panelista que nunca ha cesado de declarar su amor a Pinochet y su entusiasta adhesión a las violaciones a los derechos humanos de su régimen.

“Mi problema no es lo que piense Patricia Maldonado, pero yo tengo el derecho a no estar con alguien que defiende a aquellos que asesinaron e hicieron desaparecer a mis amigos”, explicó Goic, despertando la solidaridad de su gremio.

A partir del incidente, los derechos humanos se tomaron la agenda noticiosa y el debate se concentró en la conveniencia de mantener en los medios a personajes influyentes y promotores de “discursos del odio”, penados como delitos en muchos países democráticos y sobre los cuales se discuten hoy algunos proyectos en el Congreso chileno.

Hacia solo tres meses que la cantante en cuestión, Patricia Maldonado, había felicitado al diputado Ignacio Urrutia cuando este calificó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos como “terroristas con aguinaldo”.

El exabrupto del congresista fue su respuesta a un proyecto que la presidenta Bachelet había ingresado al Congreso cinco días antes de dejar la Monedita, en el cual planteaba la entrega de un aporte único de reparación a víctimas de prisión política y tortura que figuran en las Comisiones de Verdad. “Vamos, diputado Urrutia, siga dando la pelea. Nunca olvide que los valientes mueren de pie y los cobardes mueren de rodillas y llorando”, comentó Maldonado, agregando una ofensa adicional a los familiares de quienes fueron detenidos, torturados o fusilados en el período dictatorial.

Sus expresiones desataron la molestia de varios parlamentarios de oposición y de gobierno, y de los familiares y víctimas de detención y torturas. A raíz de este episodio se reactivó la campaña de firmas que hace tiempo se había iniciado para sacar a Maldonado de pantalla.

Las organizaciones de derechos humanos estaban profundamente molestas ante la decisión de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional a siete violadores de derechos humanos, para que cumplieran el resto de la pena en sus hogares. Todos, menos uno, habían ingresado a Punta Peuco a partir del año 2015 y jamás habían demostrado arrepentimiento, reconocido sus delitos ni colaborado con la justicia, requisitos establecidos por los tratados internacionales sobre la materia.

Develando la nueva postura del máximo tribunal para zanjar estas causas, el fallo desechó los argumentos con que previamente la Comisión de Libertad Condicional les había denegado los beneficios carcelarios mencionados a los presos por estos crímenes atroces. Ello desató una ajizada polémica y la disputa terminó con una presentación por parte de diez senadores de oposición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitándole un pronunciamiento en materia de condenas por delitos de lesa humanidad en Chile. En el documento se señala que la Comisión debe conocer el fallo de la Corte Suprema, que califica como “grave”, ya que podría estar propiciando la impunidad a través de la concesión indebida de beneficios durante la ejecución de penas por horribles crímenes contra la humanidad, infringiendo así la obligación de sancionarlos.

Además, el escrito advierte sobre las condenas desproporcionadamente bajas en relación con la “naturaleza de los delitos” y la “lentitud en los procesos”, que atribuyen a una estrategia de los abogados defensores de recurrir al Tribunal Constitucional. Según sus patrocinadores, el propósito de esta iniciativa sería ordenar al Estado que se legisle para incluir en la ley chilena los estándares internacionales sobre libertades condicionales.

Por su parte, dieciséis dirigentes políticos de la centro izquierda<sup>2</sup> hicieron saber su posición en carta a *El Mercurio*: “¿Cuan frágil es la institucionalidad jurídica en nuestro país si de un día para otro es capaz de dejar en libertad a condenados por violaciones a los derechos humanos, incluso cuando la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones les haya negado el beneficio, por no haber colaborado en las investigaciones ni mostrar arrepentimiento alguno por sus crímenes?”. Agregan que “el razonamiento de la Corte Suprema nos genera profunda preocupación, ya que amenaza con normalizar la impunidad, vuelve a victimizar a familiares y sobrevivientes, atenta contra el Derecho Internacional y avala la amnistía”<sup>3</sup>.

Diez congresistas opositores interpusieron una acusación constitucional en contra de tres integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemuller y Manuel Antonio Valderrama, por abandono de deberes al otorgar libertades condicionales a condenados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese al entusiasmo inicial, la acusación se perdió porque se fueron generando dudas en algunos representantes de los partidos involucrados tras opiniones contrarias de algunos constitucionalistas. Las directivas del Partido Socialista y el Partido Por la Democracia decidieron poner el énfasis en la presentación del recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Comisión Mixta sobre Libertades Condicionales, quitando fuerza a la acusación que comenzaron a visualizar como “compleja”.

## 2 Unidad opositora

A pesar de que la oposición aún está lejos de lograr una postura unitaria frente al oficialismo, lo sucedido logró agrupar desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio. Fue la reacción natural a una cadena de episodios que, además de la liberación de los reos de Punta Peuco y los dichos del fugaz ministro Rojas sobre el Museo, sumaron la muerte del valiente abogado de derechos humanos Andrés Aylwin y la designación en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del médico Luis Castillo. Según los democratacristianos, en el año 2002 este ordenó mantener oculta en el Hospital de la Universidad Católica una autopsia del expresidente Eduardo Frei Montalva. Sostienen que, si no hubiese sido por una persona que entregó en forma anónima la información de que había antecedentes de un allanamiento de la Policía de Investigaciones (PDI) a este centro hospitalario, ni la familia ni la justicia habrían dado con ese valioso material.

2 Incluidos Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), Democracia Cristiana (DC), Partido Por la Democracia (PPD), Revolución Democrática (RD), Izquierda Autónoma (IA) y Movimiento Autonomista (MA).

3 *El Mercurio*/Cartas, 3 agosto 2018. <https://bit.ly/2KpbhVN>

La defensa de Castillo que el propio Piñera realizó en algunos programas de televisión, aumentó la molestia de la DC y la oposición acordó bloquear la presencia del subsecretario en el Congreso.

Por primera vez en muchos años y en una manifestación que reunió a un público desbordante y entusiasta como no se había visto desde el plebiscito, miles de artistas, jóvenes, activistas de derechos humanos y uno que otro político sin pretensiones de alto perfil asistieron a un acto de desagravio por los dichos del exministro Mauricio Rojas en el Museo de la Memoria. En este espacio discursaron, bailaron y cantaron como en los mejores tiempos de la resistencia a la dictadura.

Fue algo esperado durante décadas por las organizaciones de derechos humanos que sintieron que el dolor de lo vivido había dejado de ser un problema circunscrito a sus luchas personales, familiares o partidistas, y que hoy era compartido por la mayoría del país. Se trató de un momento mágico, porque varios estudios de psicólogos y especialistas consignan que solo el reconocimiento por parte de la sociedad que una vez ignoró sus humillaciones y pérdidas, puede entregarles dignidad y sanación a las víctimas.

Las características de la dictadura cívico-militar en Chile fueron la negación y la borradura. En primer lugar, tras el bombardeo, la reconstrucción del Palacio de La Moneda en que se eliminó la puerta de Morandé 80: si no había puerta, el cadáver del Presidente y sus colaboradores no habían salido por allí. Luego, cambio del número de la dirección del centro de torturas Londres 38: si esa dirección ya no existía, tampoco el lugar donde se habían producido torturas y asesinatos. Y, finalmente, el caso más extremo: los detenidos desaparecidos, a los cuales les negó su propia existencia.

La concentración de apoyo al Museo de la Memoria marcó un antes y un después y fue determinante en los días posteriores, cuando se celebró el aniversario del plebiscito del 5 de octubre.

### **3 Historia y memoria**

Al final de su administración, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que materializaba el polémico Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y ponerlo en marcha pasó a ser desafío fundamental del gobierno de Sebastián Piñera. El primer mandatario designó como titular de la cartera a la periodista Alejandra Pérez, que recibió este nombramiento con gran entusiasmo, manifestando de inmediato su preocupación por el atraso en la ampliación del GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral) y los bajos índices de lectura y consumo cultural del país. La última Encuesta de Participación Cultural había arrojado cifras elocuentes: a excepción de los conciertos de música pop, la asistencia a actividades de arte, teatro, museos y bibliotecas va a la baja.

Solo meses después, la ministra debió enfrentar las acusaciones lapidarias del senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, que emplazó al Gobierno a sacarla “a patadas” del cargo. Las críticas del parlamentario se sustentaban fundamentalmente en lo que él consideraba una deficiente gestión de Pérez con los funcionarios del Centro Cultural de Valparaíso, que, por problemas financieros, durante largo tiempo mantenían a la Institución paralizada.

Otros rumores y descalificaciones apuntaron a que en sus primeros cien días de gestión, Pérez había despedido a cinco jefes de gabinete y a dos jefes jurídicos. Sin embargo, para observadores del sector cultural, la suerte de la periodista estaba echada desde que había dado un golpe de timón cancelando la muestra “Hijos de la Libertad” en el Museo Histórico Nacional y destituyendo a su director, el antropólogo Pablo Andrade. La exposición presentaba al general Pinochet vinculado al concepto de libertad, lo que había desatado una polvareda de marca mayor. Se habló de “imprecisiones”, de “desprolijidad” y de “graves errores”. Y luego de tomar el sartén por el mango, la ministra señaló que las nuevas muestras serían “observadas”. La reacción del subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, no se hizo esperar: “Nosotros no vamos a actuar de censores de los museos nacionales. No nos parece que corresponde”.

A pesar de que Chahuán pidió excusas por su violenta descalificación a Alejandra Pérez, la periodista en el cargo fue efímera y debió abandonar La Moneda junto al titular de Educación, Gerardo Varela, en el primer cambio de Gabinete.

A raíz de la polémica sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos desatada por su sucesor, Mauricio Rojas, la derecha arremetió una vez más opinando sobre lo que, a su juicio, el Museo debería ser. Algunos de sus personeros reprocharon lo que califican como falta de “contexto” en la muestra estable y volvieron a aflorar las discrepancias de los especialistas sobre el rol de historia y memoria.

Esta disputa permitió poner algunas cartas sobre la mesa e involucró a académicos de varias universidades. El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que integra el directorio del Museo de la Memoria, sostuvo que esta institución no tiene la función de explicar historiográficamente lo ocurrido en el período 1973-1989. Acotó que su objetivo es recordar, conmemorar, moralizar: “Se podrá cuestionar su guion o su museografía, pero difícilmente pueda decirse que no cumple con su tarea, a saber: impresionar al espectador, incluso mediante el drama y, hasta cierto punto, la despolitización”.<sup>4</sup>

4 Palabras recogidas por J. L. Ossa Santa Cruz, director Centro de Estudios de Historia Política, Universidad Adolfo Ibáñez, en “Museo de la Memoria”, *El Mercurio/Opinión/Cartas*, 16 agosto 2018, A2. <https://bit.ly/2z6tXa7>

El académico y columnista Francisco José Covarrubias intervino en el debate para advertir que la derecha sigue al debe en la materia. A su juicio, cuando se enarbola la bandera del contexto se intenta legitimar los hechos. “En el fondo, que las cosas pasan por algo. Que la violación de una mujer se explica, en parte, porque llevaba una falda muy corta”.<sup>5</sup>

El director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Luis Ossa Santa Cruz, matizó las opiniones de los más críticos al sostener que “una y otra vez se ha confundido la memoria con la historia” y que ambas, aunque similares, no son lo mismo.

Ossa, que forma parte del equipo encargado de elaborar un “Museo de la Democracia” anunciado por Piñera en el año 2017, argumenta que el problema surge cuando se le pide al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que sea, además, un museo de la historia política de Chile: “El fin de la memoria es crear conciencia cívica. La historia, en cambio, es mucho más compleja y problemática”.

Covarrubias sostiene que, en la historia, el conflicto y la violencia juegan sin duda un papel clave como mecanismo de explicación. “Sin embargo, la política es también negociación, entendimiento y consensos”. Concluye que quizás se le esté pidiendo demasiado al Museo de la Memoria. “¿No habrá llegado el momento de construir un museo que dé cuenta de los altos y bajos de nuestra democracia, entendida esta como un sistema de gobierno que se construye en el largo plazo y sin un horizonte claro y predeterminado?”, interpela Ossa. Señala que, a su juicio, ambos museos podrían trabajar en conjunto, pues en ningún caso el de la Democracia debería ser visto como una respuesta al de la Memoria. Agrega que sus misiones serían distintas, abarcando el segundo cuestiones que irían más allá de la memoria reciente.

El Gobierno reactivó, aunque en esta oportunidad más tímidamente, su proyecto de Museo de la Democracia, el cual, cuando fue anunciado, despertó una fuerte controversia entre oposición y oficialismo e incluso al interior de la derecha. Sus detractores sostienen que es debatible que para la preservación de los valores de la democracia sea necesaria la construcción de un museo. Y argumentan que para el fortalecimiento de estos valores podrían aprovecharse las capacidades de museos ya existentes, como el Histórico Nacional. Cuestionan también la cantidad de recursos públicos que involucraría esta iniciativa, el período que abarcaría la muestra (lo que no deja de ser una ironía) o la forma en que se presentarían las figuras de Salvador Allende y Augusto Pinochet.

5 F. J. Covarrubias, “Lo que el museo nos dejó...”, *El Mercurio*/Columnistas, 18 agosto 2018. <https://bit.ly/2DqgoFA>

Tomando en cuenta que el propio Presidente ha dado a entender que este espacio podría explorar las razones por las que se perdió la democracia en 1973, la oposición ha sugerido que esta propuesta podría consistir en un intento de empate con el Museo de la Memoria.

El expresidente Ricardo Lagos afirmó: “Me gustaría que fuéramos capaces de superar la teoría de cómo le empato al otro”. Y agregó que para respetar la democracia, en ella los derechos humanos son centrales y nada justifica su violación. “No es un tema de estar construyendo museos. El Museo Histórico Nacional es el museo de la democracia chilena, en tanto hemos tenido democracia en la mayor parte de nuestros 200 años. Usted lo arregla un poquito y tiene el mejor ejemplo de la democracia”.

Consultados sobre el estado de la iniciativa, altas fuentes del gobierno señalaron que “está todo en marcha”, que cuenta con todos los permisos requeridos. Aclararon que esperan obtener en comodato un espacio que hoy ocupa Correos de Chile y que, finalmente, se instalará en un sitio contiguo al Museo Histórico Nacional. En este espacio ocupará un lugar relevante la transición a la democracia. Su diseño museográfico contempla espacios para los presidentes de la República a partir de Patricio Aylwin, y cada uno de ellos tendrá su plataforma digital, que incluirá documentos y fotografías.

Si bien aún se desconoce la fecha de su inauguración, se presume que estará a cargo de Consuelo Valdés, la recién designada ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con una vasta trayectoria y conocimiento en el mundo cultural, su designación permitió al Gobierno retomar la difícil agenda que enfrenta esta cartera: la puesta en marcha de la nueva institucionalidad. Esta incluye diversas reparticiones antes dispersas, la diferida designación de algunos directores de museos y la dotación de contenidos a la amplia red de centros culturales de Santiago y regiones.

Valdés prometió ocuparse de los requerimientos pendientes en infraestructura, facilitación del acceso a la cultura utilizando lenguajes más amigables y fomento del desarrollo de proyectos creativos. Anunció también la revitalización e inyección de recursos a los museos nacionales y la revisión de la compleja Ley de Monumentos Nacionales.

Una de sus primeras apariciones públicas consistió en una publicitada visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, espacio emblemático de Michelle Bachelet al que prometió entregar atención y garantías. Al mismo tiempo, en Nueva York, la expresidenta asumía el cargo de Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.